

**FORD ARGENTINA SCA y otros C/ AGENCIA DE RECAUDACION
FISCAL S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA
Causa n° 61372**

San Isidro, 16 de Julio de 2020.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "**FORD ARGENTINA SCA y otros C/ AGENCIA DE RECAUDACION FISCAL S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA**" (Causa n° 61372), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro a mi cargo, Secretaría única a cargo de las Dras. Analía Heras Musri, Verónica de Igarzábal y María Natalia Gómez, de los que:

RESULTA:

Que mediante escrito electrónico del día 15 de julio de 2020 se presenta el Dr. Francisco María Astolfi en representación de la empresa Ford Argentina SCA y de los Sres. Enrique Alemany, David Thomas John Clark, AmitSinghi, Carlos Julián Valdéz, Emerson José Baldin, Carlos Juan Mignauy, Guy Bertrand Martín e, invocando el art. 48 del CPCC, en carácter de gestor de negocios de los Sres. Enrique Araiza Méndez, Ricardo Flamini y Carlos José Galmarini.

En tal carácter, y de conformidad con los arts. 22 y 23 del CCA, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar con el objeto que la suscripta: a) Disponga la suspensión de los plazos procesales en curso para la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto el Poder Ejecutivo Provincial decrete la reanudación de los plazos procesales, o bien hasta estime que el debido proceso de sus representados pueda ser ejercido en forma plena; b) Ordene a ARBA que se abstenga de computar los plazos para apelar la Disposición SEATYSn° 1741/2020 hasta tanto se reanuden los plazos procesales por cuanto los mismos se encuentran suspendidos en virtud de las disposiciones del Decreto Provincial N° 166/2020 (prorrogado por los Decretos N° 167, 180,

255, 282, 340, 433, 498 y 583/2020) así como por el Acuerdo Extraordinario N° 95 del TFA; como de adoptar cualquier medida tendiente al cobro de la presunta deuda determinada en la mencionada Disposición hasta que mis representadas puedan ejercer debidamente su derecho de defensa.

Expresa que, de no obtener el dictado de la medida cautelar solicitada, sus representados se verían en la disyuntiva de ejercer su legítimo derecho e incumplir la normativa nacional y/o provincial que limita la circulación de personas en virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, o cumplir con la normativa sanitaria y no presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación. Considera injusta dicha circunstancia.

Afirma que, si la firma Ford no presenta el recurso de apelación el día 21 de julio de 2020 en las oficinas de ARBA sitas en Avellaneda, se vería expuesta al inicio del juicio de apremio por sumas millonarias, lo que agravaría más aun la situación en la que se encuentra mi representada en esta situación de pandemia y crisis generalizada.

Asimismo, invocando las Resoluciones N°386/20 y N°480 de la SCBA (y sus sucesivas y complementarias), solicita la habilitación de la instancia en el entendimiento que la resolución de la presente medida cautelar requiere una urgencia tal que, de aguardar el levantamiento de la feria judicial dispuesta por la Suprema Corte Provincial, los derechos sus representados resultarían ilusorios. Cita y transcribe, en abono de su petición, el art. 153 del CPCC, la parte que estima pertinente de la Resolución 386/20 y el art. 5 de la Resolución 480/20.

Hace una reseña del Procedimiento Determinativo y Sumarial iniciado mediante el dictado de la Disposición Delegada SEATYS N° **Disposición Delegada SEATYS N° 1741/2020** 2020/2019 de fecha 14 de noviembre de 2019 que derivó en el dictado de la **Disposición Delegada SEATYS N° 1741/2020** que, notificada a la empresa con fecha 26 de junio de 2020, motivó el inicio de la presente.

Cita y transcribe el marco normativo y medidas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia y emergencia sanitaria a fin de evitar la propagación del COVID19, que se traducen en la prohibición de circular dentro del ámbito del AMBA y, en lo que interesa al caso, suspensión de los procedimientos y plazos administrativos correspondientes al Código Fiscal - Ley n° 10.397 t.o. 2011 - hasta el día 17 de julio de 2020, inclusive (Decreto del PEN n° 297/20, ASPO, Decretos N° 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020 y 576/2020, Decretos Provinciales n° 166/2020, 167, 180, 255, 282, 340/2020 ratificados por la Ley Provincial n° 15.174, Decretos Provinciales n° 433, 498 y 583/2020 prorrogaron la vigencia del Decreto N° 132/2020). Por su parte, transcribe lo dispuesto por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, mediante Acuerdos Extraordinarios n° 94 y 95 (suspensión de plazos procesales).

De conformidad con ello, dado que el Aislamiento Social, Preventivo se encuentra prorrogado tanto por el Poder Ejecutivo Nacional como por el Poder Ejecutivo Provincial, sostiene que los plazos se mantienen suspendidos al día de la fecha, situación que desconoce ARBA a través del dictado de las Resoluciones Internas n° 84/2020 90/2020, contrarias a las medidas dispuestas por el PEN y el propio Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires. Tacha este proceder de la Agencia de manifiestamente arbitrario.

Funda la procedencia de la medida solicitada en la Disposición Delegada SEATYS N° 1741 y del artículo 3° de la parte resolutive de la que se desprende que a criterio de ARBA, el plazo para interponer el recurso de apelación ante el TFA no se encuentra suspendido. De modo tal, afirma, de no obtenerse la medida cautelar que aquí se solicita FORD y los directores involucrados se encontrarían ante la clara disyuntiva de (i) incumplir con el ASPO y presentar -a través de sus abogados que NO constituyen una actividad esencial- el recurso de apelación ante el TFA en la oficina de ARBA en Avellaneda; o (ii) cumplir con la normativa nacional dictada al efecto y dejar

firmes el acto administrativo dictado por ARBA y verse expuesto al inicio de un juicio de apremio por sumas millonarias por parte del Organismo recaudador. Las circunstancias influya en el desarrollo del proceso ante el TFA, más aun teniendo en cuenta el perjuicio que el inicio de un apremio causaría en el giro comercial de FORD, así como los derechos patrimoniales de los responsables solidarios. Dicho perjuicio se agrava aún más teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se encuentra atravesando el país, la que ya impacta en la situación económica del país y de forma particular en FORD.

Considera que en el caso, se encuentran reunidos los tres requisitos enunciados en el art. 21 del CCA: a) Verosimilitud del derecho en función de los argumentos de hecho y de derecho expuestos; b) Peligro en la demora derivado de la imposibilidad de ejercer en debida forma el derecho de defensa garantizado por la Constitución Nacional dentro del plazo legal establecido. Destaca que si bien los plazos procesales fueron expresamente suspendidos por el TFA, el recurso debe presentarse en las dependencias de ARBA, y; c) La medida requerida no causa perjuicio alguno al Fisco Provincial toda vez que el recurso de apelación tiene efecto suspensivo, por lo que no puede sostenerse que suspender los plazos en curso para recurrir ante el Tribunal Fiscal de Apelación.

En forma subsidiaria, solicita se otorgue a los representantes legales el salvoconducto necesario para la preparación y presentación del recurso de apelación ante las oficinas de ARBA en Avellaneda expidiéndose la correspondiente autorización judicial que permita que el firmante, o los Dres. Guillermo A. Lalanne, Simón Striga y/o Federico Ochoa puedan desplazarse o dirigirse a las oficinas de ARBA a fin de realizar la presentación del recurso de apelación contra la Disposición Delegada 1741/2020.

Cita Jurisprudencia. Ofrece Prueba. Hace reserva del Caso Federal.

CONSIDERANDO:

1- En primer lugar cabe destacar que la tutela judicial anticipada

que se requiere lo es en forma autónoma, esto es, se persigue el dictado de una medida cautelar desvinculada de una pretensión de las enumeradas en el artículo 12 del CCA. Se trata de una medida autosatisfactiva o de urgencia, con lo cual el análisis de la verificación de la existencia de los extremos habilitantes para el dictado de la medida peticionada deben extremarse.

2- Las presentes actuaciones fueron iniciadas con el objeto de obtener una tutela cautelar autónoma que conlleve a la suspensión del plazo para interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires -recurso impugnando la Disposición SEATYS Nro. 174/2020- y a la abstención de la ARBA de computar los plazos para apelar y de adoptar medidas tendientes al cobro de la deuda; ello, con apoyatura en la vigencia del ASPO -aislamiento social, preventivo y obligatorio-, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional -Decreto Nro. 297/20 y Nro. 576/20, arts. 11 y 12; en la suspensión de procedimientos y plazos administrativos correspondientes a la aplicación del Código Fiscal dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nro. 166/20 y sus prórrogas -ratificados por Ley 15174- y en la suspensión de términos procesales en el ámbito del Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establecida en los Acuerdos Extraordinarios Nros. 94 y 95 del TFPBA. En modo subsidiario, solicita que la suscripta otorgue al peticionante autorización para circular a los efectos de preparar y presentar el recurso precitado ante la Delegación de ARBA en Avellaneda.

El letrado que se presenta en los términos del art. 48 del CPCC cimenta la fatalidad de acudir ante esta instancia en la imposibilidad de trasladarse físicamente hasta la sede de la Delegación de la ARBA sita en la localidad de Avellaneda, lugar donde el artículo 14 de la Disposición Determinativa en cuestión indica como único apto para recepcionar el recurso de apelación que oportunamente será elevado al TFPBA. Ello, por no encontrarse comprendida la actividad de los abogados en la categoría de excepción de las actividades esenciales.

3- Sobre la solicitud de habilitación de feria, debo aclarar al

peticionante que conforme lo dispuesto por nuestro Superior Tribunal en las Resoluciones Nro. 480/20 y 593/20 los plazos procesales en el marco de las causas que tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se encuentran reanudados desde el 6 de mayo de 2020 y habilitados los inicios de nuevas causas sin restricciones a partir del día 25 de junio de 2020, sin desmedro de las facultades de los Magistrados de ponderar las medidas que pueden practicarse en el marco del ASPO conforme arts....Res SCBA Nro...).

Dicho lo cual, la petición de habilitación de feria deviene desatinada.

No lo es, por el contrario, la solicitud de admisión del letrado peticionante, en los términos del art. 48 del CPCC, por lo que se lo tiene por presentado, en tal carácter y con el apercibimiento previsto en dicha norma

4- Que conforme la doctrina y jurisprudencia, para el dictado de este tipo de medidas autónomas deben concurrir tres recaudos, que superan el umbral de los extremos clásicos para la evaluación de una tutela cautelar: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y no afectación grave del interés público (art. 22 del CCA).

Primeramente, debe existir evidencia, esto es, una fuerte probabilidad, cercana a la certeza y no una simple verosimilitud de que sea atendible el derecho invocado.

En lo atinente al peligro, se exige la frustración del derecho: que se encuentren comprometidos o en riesgo derechos subjetivos medulares que por su propia naturaleza posean una mayor dosis de urgencia, y que no se contrapongan, respecto del destinatario de la medida, con otros derechos de igual rango. En esa senda, la urgencia debe ser manifiesta y extrema.

La apreciación de la afectación del interés público lógicamente se pondera también con mayor estrictez

4- En este punto, la resolución que se pretende requiere de más información que la agregada a estas actuaciones por lo cual -en uso de la atribución del art. 23 inc. 1 del CCA- corresponde requerir a la ARBA que

produzca informe sobre la medida solicitada por la actora, y específicamente explice medios alternativos a la presentación en papel del recurso de apelación contra la Disposición SEATYS Nro. 1741/2020 -en atención a la restricción para circulación personal vigentes desde el 20 de marzo de 2020- precisando si se trata de domicilio electrónico o mail y los recaudos y requerimientos especiales que debe observar la empresa recurrente.

5- Mientras tanto, urge tomar una medida que precava del inequívoco perjuicio -peligro en la demora- que se irrogaría al actor: la frustración del derecho a recurrir, por el agotamiento del plazo legal en curso.

Con asidero en la vigencia del principio del debido proceso adjetivo, derivado de la garantía constitucional de la defensa en juicio, en todos los procesos y procedimientos tanto judiciales como administrativos avisto el halo de verosimilitud del derecho, que habilita la suspensión en forma precautelar del plazo para apelar en curso.

Como es sabido, el debido proceso como garantía presenta diversas aristas; en lo que aquí interesa, el derecho a ser oído: la posibilidad de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto y desde luego y primordialmente, de interponer los recursos correspondientes.

En esa senda, estimo que se encuentra configurada la verosimilitud del derecho, y no corroboro afectación al interés público, pues si bien se ha dicho innumerables veces que “...el régimen de medidas cautelares en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez (CSJN, Fallos: 11/12/90, Firestone; 27/4/93, Video Cable Comunicación; 23/11/95, Grinbank, Fallos: 325:3284, 326:880, entre otros), pues excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad en razón de su aptitud para perturbar la oportuna percepción de la renta pública (confr. CSJN, Fallos 320:2697; 321:695; 326:1549, 326:3729 entre otros, Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín; Expte. 142/2005)”; el ejercicio de esa potestad debe ser llevado a cabo legítimamente, de conformidad con los límites y condiciones determinadas por la Constitución

Nacional.

Por lo vertido, ordeno en forma precautelar la suspensión desde la fecha de este decisorio del cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación contra la Disposición SEATYS Nro. 174/2020- Todo ello provisionalmente hasta contar con el informe que se requiere en este decisorio a la ARBA y resolver en definitiva sobre el planteo cautelar autónomo propugnado, lo que así se decide.

6- Postreramente, en orden a la contracautela y en mérito del carácter precautelar de la medida que se dispone, de la cual no parece derivar en lo inmediato perjuicio económico para la ARBA -en tanto hasta el vencimiento del plazo dispuesto en el art. 115 del CF no se habilita la vía procesal de ejecución fiscal conforme art. 117 del CF- se otorga la misma bajo caución juratoria (art. 24 del C.C.A). Dada la situación de emergencia por la pandemia del COVID-19, dicha caución podrá ser presentada electrónicamente, conforme lo dispuesto en el art. 3 b. 3 de la Resolución SCBA 10/20 del 18/03/2020.

RESUELVO:

1) Requerir a la ARBA que en el plazo de 5 (cinco) días produzca informe sobre la medida solicitada por la actora, y específicamente explicita medios alternativos a la presentación en papel del recurso de apelación contra la Disposición SEATYS Nro. 1741/2020 -en atención a la restricción para circulación personal vigentes desde el 20 de marzo de 2020- precisando si se trata de domicilio electrónico o mail y los recaudos y requerimientos especiales que debe observar la empresa recurrente LÍBRESE OFICIO DE ESTILO, quedando a cargo de la parte su confección y diligenciamiento.-

2) Ordenar en forma precautelar la suspensión desde la fecha de este decisorio del cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación contra la Disposición SEATYS Nro. 174/2020- Todo ello provisionalmente hasta contar con el informe que se requiere en este decisorio a la ARBA y resolver en definitiva sobre el planteo cautelar autónomo propugnado;

3) Líbrese por Secretaría oficio electrónico a la ARBA adjuntando el presente resolutorio en forma íntegra.

4) Previo a lo ordenado en el punto **3)**, deberá prestar el accionante caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la cautelar acordada (art. 24 del C.C.A).

Dada la situación de emergencia por la pandemia del COVID-19, dicha caución deberá ser presentada electrónicamente, conforme lo dispuesto en el art. 3 b. 3 de la Resolución SCBA 10/20 del 18/03/2020. **REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE** por Secretaría en forma urgente.

María Fernanda Bisio

Jueza

Reg. n°-Int.